

González, en nombre y representación de Transportes Buytrago Andalucía, S.A., se procede a la publicación del fallo en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el artículo 59.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (BOE núm. 285, de 27 de noviembre de 1992), en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero (BOE núm. 12, de 14 de enero) que modifica la anterior, siendo del siguiente tenor literal:

“FALLO: En atención a lo expuesto esta Junta Arbitral, por unanimidad acuerda estimar en parte la reclamación planteada por Transportes Buytrago Andalucía, S.A. debiendo abonar el reclamado, D. Juan Manuel Cañamero, a la reclamante, la cantidad de 775,50 € de principal, más la cantidad correspondiente, a determinar en fase de ejecución del laudo de acuerdo con la consideración cuarta, en concepto de intereses de demora.”

Contra este Laudo puede interponerse recurso de anulación, en el plazo de diez días contados desde el día siguiente al de su notificación, ante la Audiencia Provincial de Badajoz, de acuerdo con la Ley 36/1988, de 5 de diciembre, de Arbitraje

Mérida, a 1 de septiembre de 2003. El Presidente de la Junta Arbitral de Transporte de Extremadura, JOSÉ FÉLIX HERNÁNDEZ BUSTOS.

ANUNCIO de 2 de septiembre de 2003, por el que se somete a información pública la reversión de terrenos de la zona de influencia en la carretera EX-203, P.K. 42,200.

Habiéndose solicitado por D. Delfin Gil Gómez la reversión de unos terrenos situados en la zona de influencia de la Carretera EX-203, en su p.k. 42,200, habiendo recaído informe favorable del Servicio Regional de Carreteras, se abre un periodo de Información Pública por término de 15 días, a fin de que cualquier otra persona que pueda acreditar estar en posesión de los requisitos que le legitimarían para el ejercicio de idéntico derecho de reversión (ser el primitivo dueño o causahabiente de los terrenos cuya reversión se interesa), pueda ejercer el mismo en idéntico plazo de 15 días, mediante escrito dirigido al Servicio de Bienes Inmuebles y Expropiación Forzosa de la Consejería de Fomento en Paseo de Roma, s/n., de Mérida, aportando la documentación acreditativa de sus pretensiones, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Expropiación

Forzosa en su redacción dada por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación y concordantes de su Reglamento.

Mérida, a 2 de septiembre de 2003. El Secretario General (P.O. 16 de julio de 2003), FRANCISCO PACHECO RUBIO.

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2003, sobre notificación de la propuesta de Resolución de expediente de desahucio incoado contra D. Antonio Pimienta Pimienta.

No habiendo sido posible practicar a D. Antonio Pimienta Pimienta la notificación de la Propuesta de Resolución del expediente de desahucio núm. B-57/02 que se especifica en el Anexo, se procede a su publicación en el Diario Oficial de Extremadura, de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (B.O.E. nº 285, de 27 de noviembre de 1992).

Badajoz, a 3 de septiembre de 2003. La Instructora, P.O. AMALIA LAVADO CRUZ.

ANEXO

PROPUESTA DE RESOLUCIÓN

Ilma. Sra:

Visto el expediente de desahucio administrativo núm. B-57/02, incoado contra D. Antonio Pimienta Pimienta por infracción del régimen legal que regula las Viviendas de Protección Oficial, y,

HECHOS

1º.- Que según consta en el expediente instruido con fecha 27 de enero de 2003, D. Antonio Pimienta Pimienta, adjudicatario legal de la vivienda sita en Oliva de la Frontera, Avda. Morisco-te, bl. 8, 1ºC, del Grupo de Viviendas Sociales, no destina la vivienda a domicilio habitual y permanente y es propietario de otra vivienda.

2º.- Hechos probados.- Que queda demostrado que D. Antonio Pimienta Pimienta, tiene otra vivienda en C/ Fuente Nueva, núm.

20 de Oliva de la Frontera no ocupando la vivienda de la Avda. Moriscote, bl. 8, 1ºC.

3º.- Que con fecha 25 de marzo de 2003, se notificó al expedientado el correspondiente Pliego de Cargos, por los hechos declarados probados en el anterior hecho expositivo, concediéndole un plazo de cinco días hábiles, para que formulara las alegaciones y propusiera las pruebas que estimara procedentes.

4º.- Que transcurrido el plazo concedido al efecto el expedientado no presenta las alegaciones pertinentes.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1º.- Que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto 949/84 de 28 de marzo y art. 3 del Decreto 91/99 de 29 de julio sobre traspaso de funciones a la Junta de Extremadura en materia de vivienda y estructura orgánica de la Consejería de Vivienda, Urbanismo y Transportes, es competente esta Dirección General para la Resolución del expediente.

2º.- Que en virtud de lo dispuesto en el Real Decreto-Ley 31/1978, de 31 de octubre sobre política de Viviendas de Protección Oficial, Real Decreto 3148/1978, de 10 de noviembre, Real Decreto 2960/76, de 12 de noviembre que aprueba el Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial, el vigente Reglamento de 24 de julio de 1968 y disposiciones legales concordantes y complementarias, a la vivienda objeto de este expediente le es aplicable al régimen legal de uso, conservación y sancionador en dichas normas regulado.

3º.- Que en los hechos declarados probados en el segundo Resultando de esta Propuesta de Resolución constituyen la causa especial de desahucio administrativo tipificada con los núms. 5 y 6 del art. 30 del Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial aprobado por Real Decreto Decreto 2960/76, y en el 138 del Decreto 2114/68, de 24 de julio que aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial.

4º.- Que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 del repetido Texto Refundido de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial y 141 del Decreto 2114/68 de 24 de julio que aprueba el Reglamento para la aplicación de Viviendas de Protección Oficial y Real Decreto 949/1984, de 29 de marzo, Decreto 91/99 de 29 de julio de la Dirección General de la Vivienda, previa la tramitación del correspondiente expediente administrativo, podrá acordar el desahucio, y en su caso, el lanzamiento de los arrendatarios o beneficiarios de las viviendas, locales

de negocios o servicios complementarios de su propiedad cuando concurren cualquiera de las causas tipificadas en el art. 30 de Texto Refundido y 138 de su Reglamento.

5º.- Que en la tramitación de este expediente se han cumplido cuantos plazos y requisitos señala el art. 142 del Decreto 2114/68, de 24 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Viviendas de Protección Oficial, así como la Orden de 19 de enero de 1978, que establece el procedimiento de urgencia para estos expedientes, en relación con el art. 50 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

VISTO

Los preceptos legales citados, la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas concordantes y complementarias de general aplicación, el Instructor que suscribe eleva a V.I., la siguiente,

PROPUESTA

Resolver el contrato de arrendamiento suscrito entre la Consejería y D. Antonio Pimienta Pimienta, respecto de la vivienda sita en Oliva de la Frontera, Avda. de Moriscote, bl. 8, 1ºC, del Grupo de Viviendas Sociales, requiriendo al expedientado para que desaloje voluntariamente la vivienda en el plazo de diez días contados a partir del día siguiente a la notificación de la Resolución, advirtiéndole que una vez transcurrido dicho plazo se procederá a su lanzamiento.

No obstante V.I. resolverá Badajoz, a 1 de julio de 2003. La Instructora, Amalia Lavado Cruz.

***ANUNCIO de 5 de septiembre de 2003,
por el que se somete a información pública
la enajenación de terrenos en la carretera
EX-390, PP.KK. 10,600-13,550.***

Habiéndose solicitado por D^a Martina Sandín Matías enajenación de un terreno situado en la Carretera EX-390, entre los pp.kk. 10,600 y 13,550 y, habiendo recaído informe favorable del Servicio Regional de Carreteras, se abre un periodo de Información Pública por término de 15 días, a fin de que